

Cambiar para no cambiar

Los reformadores mexicanos me recuerdan a aquella famosa predicción del basquetbolista de los NY Knicks, Micheal “Sugar” Ray Richardson, de que su equipo era “un barco que se estaba hundiendo”. Cuando un periodista le preguntó ¿qué tanto se podría hundir?, la respuesta fue “el cielo es el límite”. Las contradicciones son inherentes a nuestro sistema de gobierno, diseñado para que todo cambie y que, al mismo tiempo, todo siga igual.

Desde los ochenta, el país se embarcó en un proceso de reforma con un objetivo público muy claro, pero con una agenda privada al lado. Lo público era elevar la productividad con la meta de, por ese medio, incrementar las inversiones y, con ello, la generación de riqueza y empleos bien remunerados. El proyecto era técnicamente impecable porque revelaba una comprensión cabal de la naturaleza del problema, al menos en términos económicos.

El país se había estancado porque tenía una economía endogámica donde proliferaban los monopolios públicos y privados, en la que los negocios de los políticos condicionaban el desarrollo

de la economía y donde los sindicatos determinaban qué avanzaba y qué se estancaba. El llamado “sistema” trabajaba para un solo objetivo: preservar y aumentar los privilegios de la clase política, descendiente de la “Familia Revolucionaria” que, por haber ganado aquella batalla épica, se sentía dueña del país, de sus recursos y de su futuro.

Aunque es evidente que mucho ha cambiado, lo que permanece de aquel mundo es esclarecedor: Ejemplos no faltan: hay mucha demanda de empleo y mucha oferta pero, gracias a los sindicatos magisteriales (en todas sus variantes), que siguen privilegiando el control sobre la educación, muchos demandantes de empleo no cuentan con las habilidades requeridas. Otro ejemplo: gracias al negocio de políticos y sindicatos que tenían el monopolio de las pipas de Pemex, el país cuenta con muchos menos gasoductos y oleoductos de los que requiere una economía que aspira a crecer con celeridad. Un último ejemplo: no sé si algún mexicano se ha percatado que tenemos un pequeño problema de seguridad, justicia, corrupción e impuni-

El país se había estancado porque tenía una economía endogámica donde proliferaban los monopolios públicos y privados, en la que los negocios de los políticos condicionaban el desarrollo de la economía y donde los sindicatos determinaban qué avanzaba y qué se estancaba. El llamado “sistema” trabajaba para un solo objetivo: preservar y aumentar los privilegios de la clase política, descendiente de la “Familia Revolucionaria” que, por haber ganado aquella batalla épica, se sentía dueña del país, de sus recursos y de su futuro.

dad, pero parece evidente que eso no le es obvio a quienes son responsables de la conducción de los asuntos nacionales a todos los niveles de gobierno; quienes han detentado el poder y sus candidatos ven este asunto como una mera molestia.

Es en este contexto que habría que evaluar reformas como la de energía, educación y el propio TLC, para no hablar de asuntos como la corrupción y la reforma de justicia: la condición sine qua non para que crezca la inversión es la certidumbre

jurídica y patrimonial, misma que es imposible en la medida en que persista en la práctica legal y burocrática el viejo sistema político y los criterios que lo animaban. El reto que esto impone en materia de energía es enorme. Justicia, seguridad y crecimiento económico van todos de la mano.

México es reconocido alrededor del mundo por las reformas que, desde hace tres décadas, comenzó a emprender. Sin embargo, comparado con otros países también reformadores, nuestro progre-

so ha sido menor por la agenda privada que ha acompañado a las reformas: todo se vale mientras no amenace los intereses y privilegios de los beneficiarios del sistema político de antaño. Tan arraigado es el criterio que hasta las dos administraciones panistas lo preservaron. La forma en que se ha conducido el gobierno federal en la contienda electoral del Estado de México es sugerente: todo se vale para que no se amenace el statu quo.

“El fin podría justificar los medios” escribió Trotsky-, siempre y cuando haya algo que justifique el fin”. El problema es que el fin implícito de las reformas es que nada cambie y, por lo tanto, las reformas acaban siendo enclenques e insuficientes, al menos en su implementación. Por supuesto que todas las reformas, en México y en el resto del mundo, de facto incorporan las realidades del poder y, en ese sentido, no se puede comparar procesos de reforma como los de Corea, Chile o China con el mexicano, pues ahí hubo gobiernos duros que impulsaron su ley.

Pero nuestro caso es peculiar también en otro sentido: hemos llevado a cabo

una transición política que no cambió la realidad política. Tenemos una nueva realidad electoral y de libertades pero no un nuevo régimen político. Desde esta perspectiva, el objetivo implícito de las reformas -preservar los privilegios- ha sido absolutamente exitoso.

La pregunta es a qué costo: el país lleva décadas creciendo a un magro 2% en promedio; la población reclama mejores niveles de vida pero, gracias a los privilegios, no ha tenido acceso a la educación que permitiría lograrlos; la inversión crece, pero muy por debajo del potencial; la inseguridad destruye negocios, familias, expectativas y, por encima de todo, la confianza que es clave para el progreso. Todo esto ¿a cambio de qué?

La disyuntiva es clara: damos el paso hacia adelante o seguimos en la pretensión del cambio pero en la realidad de la corrupción y la impunidad. Peor: lo poco o mucho que han avanzado las reformas está en entredicho por la amenaza externa e interna y sin una población dispuesta a defender lo que no siente suyo.

@lrubio

Jesús Cantú

Los huachicoleros y la inoperancia de las leyes

Como muchos otros delitos, el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos se disparó con el inicio de la estrategia de combate al crimen organizado, implementada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón y mantenida por el actual presidente Enrique Peña Nieto, por ello llama la atención que el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pretenda ahora responsabilizar del crecimiento a las autoridades estatales.

El General tiene razón al afirmar que es un problema añejo, pero en crecimiento y que “no es del Ejército ni de las Fuerzas Armadas, es un asunto que deben resolver los gobiernos”, pero exactamente lo mismo es aplicable para todos los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Vale la pena recordar que el 7 de noviembre de 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo, expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en la que se establece con toda claridad que su combate le corresponde al gobierno federal y aunque originalmente no se encontraba entre los delitos contemplados en la misma, la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, el 12 de enero del 2016 se agregó una fracción para incluirlos.

Al margen de que dicho delito en específico no se encontrara en dicha ley es un hecho que fueron los grupos de delincuencia organizada, dedicados a otras actividades delictivas como el tráfico de drogas y otros más si contemplados en dicha legislación, los que ampliaron sus operaciones al robo de combustibles. Así que aunque la prevención y persecución de ese delito en específico no se encontraba dentro de las facultades de las autoridades federales, si eran éstas la que debían perseguir a los grupos que las perpetraban, porque eran los mismos que cometían otros delitos si contemplados dentro de la legislación en comento.

También tiene razón el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, cuando en el mismo acto al que acudió Cienfuegos, señaló que el robo de combustibles “es una provocación de los criminales sin escrúpulos, organizados y que amedrentan a la comunidad”. Sin embargo, en lo

Vale la pena recordar que el 7 de noviembre de 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo, expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en la que se establece con toda claridad que su combate le corresponde al Gobierno federal y aunque originalmente no se encontraba entre los delitos contemplados en la misma, la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, el 12 de enero del 2016 se agregó una fracción para incluirlos.

que no tienen razón ninguno de los dos es en querer deslindar de responsabilidades al gobierno federal y nuevamente, como ha sido a lo largo de todo el sexenio, atribuirselo a los gobiernos estatales.

El gobierno federal, como también ha sido constante este sexenio, decidió emitir una nueva legislación para especificar que los “delitos cometidos en materia de hidrocarburos” son materia del fuero federal, es decir, corresponde a esta instancia la prevención y sanción de los mismos. Esta nueva legislación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016, mismo día en que se incluyó dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la ya citada.

Ni la ley ni la centralización de las atribuciones resolvieron absolutamente nada, al contrario es una realidad que el delito –tal como afirman los dos secretarios— está en crecimiento. De acuerdo a afirmaciones del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, publicadas en el portal de Animal Político, el 3 de febrero de este año: “El robo de combustibles en México en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas locales a ser la segunda fuente de financiamiento de narcotraficantes y provocar pérdidas millonarias al Estado”.

En la misma información se señala que en 2010, Pemex reportaba 691 tomas clandestinas en la red de ductos y para el 2016, la cifra ya ascendía a 6 mil 159 tomas clandestinas; y en cuanto a los litros perdidos en 2010 eran mil 692 millones de litros de combustible y en 2016, 2 mil 282 millones de litros. El año a las finanzas públicas entre el 2009 y 2016

por fugas y robo de combustible se calcula en 159 mil 957 millones de pesos.

El tema todavía cobró mayor espacio en los medios de comunicación masiva del país a partir del enfrentamiento entre los huachicoleros y el ejército el viernes 5 de mayo, que dejó como saldo 10 muertos, entre ellos 4 militares, y 12 detenidos. Un video difundido en redes sociales evidencia la ejecución extrajudicial de un civil, coloco nuevamente en el centro de la polémica al Ejército Mexicano.

Pero todo esto lo que realmente evidencia, una vez más, es el fracaso de la estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, acabar con la impunidad y pretender hacer imperar el Estado de Derecho. Ni la militarización ni la centralización de funciones en el gobierno federal ni la promulgación de nuevas legislaciones son la vía para lograrlo, mientras se insista en mantener el mismo rumbo.

Ya es tiempo de diseñar una nueva estrategia integral de combate al crimen organizado dejando de lado lo que no ha funcionado, replanteándola totalmente. En este caso sí es pertinente el partir de cero, esto no quiere decir desechar toda la experiencia, pero sí implica que se tiene que replantear totalmente la misma, partiendo de abandonar la lógica de centralizar la misma en el uso de la fuerza pública como la columna vertebral de la misma y dejarla como un eje más, al lado, de políticas sociales y económicas que permitan combatir con igual intensidad las causas estructurales que la provocan.

Más leyes sin una nueva estrategia integral simplemente profundizarán el fracaso.

¿Qué más?

El fin de Trump

La percibida ineficacia de Washington fue sin duda uno de los más poderosos motores que impulsaron a Trump.

Durante la campaña presidencial en Estados Unidos no pocos de los votantes que apoyaban a Donald Trump decían hacerlo por su probada capacidad de ejecución. Esta aparente habilidad les permitía perdonarle todo tipo de expresiones y actitudes no dignas de un presidente.

La percibida ineficacia de Washington fue sin duda uno de los más poderosos motores que impulsaron a Trump. Para el votante promedio era patente que su gobierno federal no servía: llevaba varios años operando sin que se hubiera aprobado el presupuesto; las divisiones entre demócratas y republicanos hacían prácticamente imposible legislar iniciativas importantes, la reforma al sistema de salud había pasado con votos solamente demócratas y era denunciada todos los días por los republicanos. Además, la falta de eficacia se veía agravada por la incertidumbre en materia económica y laboral para el común de la gente y por la amenaza de ataques terroristas.

En este contexto de alta polarización política, agudizado por la radicalización de los medios y la segmentación de los públicos (cada quien escogía la fuente de noticias que confirmara sesgos preconcebidos y no la más veraz o confiable), el mensaje del candidato de hombre fuerte y supuestamente eficaz fue suficiente para ganar.

El desastre del gobierno de Trump durante los primeros 100 días, mucho más caóticos que en ocasiones previas, y su relativa baja popularidad han sido terreno fértil para crecientes críticas de medios y comentaristas. Cada día mercados y analistas lo toman menos en serio, sus tuits exhiben rendimientos decrecientes y la credibilidad de su palabra se continúa devaluando. No obstante, el presidente de Estados Unidos se ha defendido subrayando que los medios de comunicación son la oposición, que en realidad hay una conspiración en su contra, que el propósito de los demócratas consiste en cuestionar la legitimidad de la elección por el involucramiento ruso y que todo esto confirma la alianza de los

poderosos en Washington y Nueva York en contra del ciudadano promedio.

Donald Trump está convencido de no abandonar a su base electoral. Siente que le ha funcionado tanto en la elección primaria como en la general, a pesar de los múltiples consejos y predicciones de que tenía que moderarse y crecientemente, ahora como presidente, va a encontrar en ella a su único aliado fiel. El relativo aislamiento de la Casa Blanca lo llevará incluso a descansar más en ella, por lo menos de manera discursiva y en términos de eventos públicos. Por eso no es lógico esperar una moderación de su parte, aunque en los hechos y en la implementación de políticas públicas termine más cerca del centro.

Al final del día, la presidencia de Trump va a terminar siendo juzgada por el éxito en términos de crecimiento económico, de su capacidad de responder ante crisis internas y externas y del avance legislativo (reducción de impuestos, sistema de salud, funcionamiento de Washington, seguridad, creación de empleos). El problema que tiene es que la probabilidad de estos éxitos depende en parte de que presida un gobierno eficaz. Incluso en materia de crecimiento económico, donde podría simplemente evitar caer en errores y cosechar lo sembrado por otros, los mercados ya han empezado a reducir las expectativas eufóricas iniciales.

El problema es todavía mayor cuando se analizan las capacidades de ejecución de esta Casa Blanca y su gabinete. El consenso ahora en Estados Unidos es que Trump cuenta con un buen secretario de Defensa, uno bueno de Seguridad Interna y un asesor de Seguridad Nacional con una visión estratégica. Los tres son generales acostumbrados a la disciplina y con capacidad de ejecución.

El resto del equipo brilla por su ausencia o por la inclinada pendiente de aprendizaje. El secretario de Estado Tillerson debe aún ganarse un espacio en la toma de decisiones y la confianza de su jefe y sus empleados. El secretario del Tesoro Mnuchin tiene la difícil tarea de vender una reforma tributaria que implica un incremento significativo en el déficit público, al tiempo que está dispuesto, contra la tradición de sus anteceso-

res, a pronunciarse por un dólar débil. En una reunión se le escuchó decir que le gustaría algún día firmar un billete de mil dólares, quizá sin darse cuenta que esa alta denominación sólo puede corresponder a una moneda que se ha debilitado de manera excesiva. Por supuesto, con la imagen de su patrón. El secretario de Comercio Ross aspira a encabezar las negociaciones comerciales internacionales, lo que disputará el todavía no confirmado representante Comercial de Estados Unidos a quien legalmente competen y, para mayor complicación, en su puesta coordinación con Peter Navarro a cargo de “comercio y manufacturas” en la Casa Blanca.

Y todo esto con una aguda ausencia de personal en el nivel de subgabinete en donde casi nadie ha sido nominado, ya no se diga confirmando. La gente cercana a la Casa Blanca defiende el modelo caótico de gobierno como un estilo personal de gobernar. El problema es que, en ausencia de resultados, continuará la merma de apoyo y la constante erosión de credibilidad interna y externa.

Sin progreso en frentes relevantes para su país, se dará el fin de Trump. Primero lo abandonará el grupo de republicanos sensatos que lo han apoyado hasta ahora bajo el argumento de que Estados Unidos, pero ellos también, necesita a un presidente exitoso. Luego los que le dieron el beneficio de la duda y se inclinaron por él en la elección bajo el supuesto de su probada eficacia y dejaron de lado bravuconadas y falta de preparación. Al final sólo quedarán los incondicionales, a quienes tanto prometió pero es mejor no pueda cumplir; que seguirán culpando al resto de su falta de éxito.

El peligro para todos, estadounidenses pero también el resto del mundo y sus vecinos Canadá y México, es que Donald Trump no sabe perder y estará dispuesto a doblar una apuesta con tal de salir arriba ante una circunstancia difícil. Un presidente bien intencionado aunque ineficaz, Barack Obama por ejemplo, difícilmente hubiera causado un daño mayúsculo. Otro ineficaz pero que cree no serlo, narcisista, beligerante y apostador es otra historia.

Comentarios: @eledede

Luis de la Calle